Adriana López Monjardin y Carolina Verduzco Ríos **Vivienda popular y Reconstrucción**

La ciudad de México ya no es la misma de antes. De antes del 19 de septiembre de 1985. Los sismos destruyeron un gran número de edificaciones en las áreas centrales de la zona metropolitana y las expectativas de una reconstrucción rápida se van disipando. Las ruinas son un componente más del paisaje urbano. Medio millón de capitalinos ven pasar los meses entre muros derruidos, bajo cartones y plásticos o hacinados en albergues y tiendas de campaña. Otros tuvieron más suerte: sus viviendas fueron declaradas habitables. Pero cada nuevo temblor, cada aguacero, ponen en movimiento a los fantasmas que se acomodan en las grietas de las paredes, contenidos apenas por una capa de yeso.

Conforme va pasando el tiempo resulta más y más difícil delimitar el grupo de damnificados por los sismos. Primero fueron los moradores de los edificios desplomados y evacuados y los habitantes de las vecindades derruidas. Pero junto a ellos van apareciendo los ocupantes de departamentos dañados, que no pueden repararlos ni mudarse de casa, aunque les dé miedo quedarse donde están. Y también los inquilinos víctimas de la especulación redoblada a partir de una nueva escasez de viviendas, atrapados entre los aumentos de rentas y los lanzamientos. Porque los sismos vinieron a potenciar la crisis de la concentración urbana más grande de la historia de la humanidad y sus efectos se siguen desplegando y agravan la difícil situación que se vivía antes del 19 de septiembre: un medio ambiente degradado, una población mayoritariamente empobrecida y con altos índices de desempleo, un grave déficit habitacional, una vialidad caótica y unos servicios saturados y al borde del colapso.

Tampoco la población capitalina es ya la misma de antes. La movilización popular desatada y sostenida después de los sismos ha involucrado a sectores mucho más amplios que los damnificados directos y apunta hacia un cuestionamiento múltiple de las condiciones que han generado una ciudad tan vulnerable y riesgosa. El mito de una población individualista e indiferente se vio, por lo menos, acotado por la solidaridad y la convivencia vecinal, que no corresponden únicamente a los momentos agudos de emergencia, ni a resabios del pasado en vías de extinción, sino a una realidad cotidiana con gran potencia de desarrollo. El mito de una población pasiva y fatalista quedó como un viejo recurso retórico, que poco tiene que ver con la inventiva popular que se puso en juego para hacer frente a la catástrofe y con la rapidez y beligerancia con la que los damnificados comenzaron a exigir sus derechos ante los casatenientes y los funcionarios públicos. El mito de los capitalinos desarraigados quedó contestado por la defensa popular de los barrios; la puesta en marcha de la memoria colectiva, que tiende sus propios puentes entre la historia y la reconstrucción de cada zona; el orgullo de ser tepiteño o tlatelolca.

Diversos procesos, más o menos latentes, fueron tomando cuerpo a partir de los sismos y tienden a configurar un movimiento urbano popular más vasto y complejo que aquél que emergió a principios de los años setenta. Entonces, los puntos más álgidos de la confrontación estaban en las colonias marginales de la periferia, producto de las invasiones de terrenos y de los fraccionamientos ilegales o clandestinos. Las políticas de regularización de la tenencia de la tierra y la drástica represión de las nuevas ocupaciones de predios han logrado contener parte de las movilizaciones de los colonos.

Pero, mientras tanto, al no haber otras alternativas de vivienda para los grupos populares y al no detenerse la migración hacia la ciudad de México, las zonas ya construidas y consolidadas de la ciudad han tenido que soportar la densificación y una mayor presión sobre las viviendas y servicios existentes. Las políticas de austeridad y los aumentos en los cobros de impuestos y servicios públicos contribuyen también al deterioro de la calidad de la vida urbana¹.

Mucha gente tenía ya motivos para cuestionar el futuro de la ciudad antes del 19 de septiembre. Pero los sismos revelaron esta tarea como algo mucho más urgente. Sobre todo porque se generalizó el reconocimiento de la incapacidad gubernamental para hacer frente a la problemática urbana: a la generada por los sismos y a la de antes. Es en este contexto más amplio donde pueden discutirse las perspectivas de la reconstrucción de la ciudad de México y de los procesos de organización y lucha de los diversos sectores damnificados. Precisamente porque en cuanto el gobierno retornó la iniciativa centró sus esfuerzos en imponer una vuelta a la normalidad, entendida como la separación tajante entre los damnificados admitidos como tales por algún organismo oficial y el resto de los capitalinos, damnificados o no.

Así, por ejemplo, se desató una amplia ofensiva política y propagandística en contra de la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), que fue acusada de estar manipulada por grupos políticos y agitadores de la oposición —cuando que era el PRI el grupo que con mayor insistencia y recursos pretendía controlar las protestas de los damnificados—; y de dar cabida a oportunistas que aprovechaban la situación y, engañados, pretendían apropiarse de una nueva vivienda —cuando que más de la mitad de las vecindades afectadas por los sismos fueron dejadas de lado por el programa de Renovación Habitacional Popular—. La CUD se vio obligada a ponerse a la defensiva y a vigilar con cuidado el carácter de damnificados de los contingentes que la conforman, en vez de llamar al agrupamiento de los diversos sectores urbanos en lucha, que tuviera por objeto, además de la solución de las demandas reivindicativas de cada uno de ellos, la participación en la toma de decisiones que afectan el futuro de la ciudad.

Pero como la reconstrucción no está a la vuelta de la esquina y los problemas de los damnificados seguirán vigentes, por lo pronto, a lo largo de 1986, tenderán a confluír cada vez más con la puesta en la orden del día de una problemática urbana más vasta, así como con las movilizaciones de otros contingentes de la zona metropolitana. En la ciudad de México están pendientes la cuestión inquilinaria y el rechazo de un importante sector de la población de los incrementos de rentas que, entre septiembre y diciembre de 1985, rebasaron el 100%.² Está en pie la preocupación que generan los grandes riesgos ante los que la ciudad resulta tan vulnerable: desde la explosión en San Juan Ixhuatepec y la amenaza de nuevos temblores, hasta la inversión térmica y los altos niveles de contaminación atmosférica que crearon una situación de emergencia en enero de 1986; en este aspecto, ha crecido la conciencia de que no se trata de accidentes inevitables, sino de un manejo de la ciudad regido por la obtención de las máximas ganancias y que sacrifica la seguridad de la población. Queda por resolver la forma en que habrá de instrumentarse la decisión gubernamental de hacer de la ciudad de México una urbe excesivamente cara, justificada bajo el argumento de desalentar la migración hacia la zona metropolitana: de aquí empiezan a derivarse incrementos sin precedentes

1 Sobre movimiento popular urbano y, en particular, sobre el auge de las luchas inquilinarias, véase “Administración de la crisis urbana”, en *Punto Crítico* n. 144, febrero-marzo de 1985. En cuanto a las movilizaciones en los años setenta, en las zonas periféricas de la ciudad, véase “El movimiento urbano popular en México” de Juan Manuel Ramírez, agosto de 1983 (mecanoescrito), trabajo presentado en el Seminario sobre Movimientos Sociales, coordinado por el doctor Pablo González Casanova.

2 Según cifras proporcionadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, y publicadas por varios diarios nacionales (*Uno más Uno*, 7 de diciembre de 1985)

en los cobros de impuestos, servicios públicos y transporte colectivo. La respuesta de la población, en cambio, aún no se manifiesta. Por último y como una cuestión más general, queda el deterioro de las condiciones de vida de amplias masas capitalinas, que carecen de empleos e ingresos estables. Tal vez no sean damnificados de los sismos de septiembre, pero sí son los damnificados históricos de la ciudad.

En contraparte, las soluciones que se den a las demandas de reposición de viviendas y los usos de suelo que se establezcan en las áreas afectadas por los sismos, involucran la suerte de sectores muy amplios de la población capitalina. Porque dichas soluciones dependen del combate que mantienen los damnificados por conservar la función habitacional de las zonas que venían ocupando, en contra de fuertes intereses especulativos que pugnan por retomar estas zonas y destinarlas a usos más rentables. En un primer momento de la confrontación, los damnificados han logrado ganar puntos a su favor: el decreto expropiatorio que abarca a poco más de 40 mil familias que viven en vecindades conjura, por lo pronto, la amenaza de los caseros que pretendían aprovechar los daños de los inmuebles para deshacerse de sus inquilinos; pero además tiene efectos indirectos sobre el conjunto de las colonias donde las expropiaciones fueron significativas, porque asienta en ellas la presencia de la vivienda popular e impide los cambios drásticos y veloces de los usos del suelo, que podrían acelerar la expulsión de los moradores de toda la colonia. La permanencia de la mayoría de los tlatelolcas en sus departamentos, desafiando los proyectos gubernamentales que pretendían dismantelar toda la unidad habitacional y poner en su lugar oficinas públicas o privadas, o un centro de convenciones, o jardines y comercios, o estadios deportivos y hoteles, es una reivindicación de las viviendas ubicadas en el corazón de la ciudad, donde se cuenta ya con infraestructura y servicios, en contra de los fraccionamientos periféricos caros, lejanos de los centros de trabajo y carentes de servicios. En lo inmediato, está la discusión sobre la viabilidad de la unidad Nonoalco-Tlatelolco; pero más en general, se trata de la confrontación entre dos opciones habitacionales, que supone la revisión de los procesos que empujan constantemente las viviendas de los grupos populares y de los sectores medios hacia zonas cada vez más lejanas de una periferia degradada.

Como los sismos afectaron especialmente la zona central de la ciudad de México, exacerbaban la lucha alrededor de una cuestión fundamental: ¿para quién es el centro? La pregunta ya estaba planteada, y hace cien años que sus habitantes vienen resistiendo los embates del capital inmobiliario, los programas estatales de remodelación urbana y la expansión de los espacios comerciales y de oficinas. A lo largo del tiempo, un inmenso número de viviendas han sido desplazadas del centro y las que permanecen han sufrido un proceso de deterioro tan prolongado que las convierte en componentes de las zonas degradadas.³

En formas habitacionales tan diferentes como son los edificios multifamiliares de Tlatelolco y las vecindades, aparece en primer plano la falta de mantenimiento de los inmuebles. Este hecho revela que la ciudad se maneja como cualquier otro objeto desechable: los edificios están destinados a la demolición una vez que se recupera el capital invertido en ellos. En la ciudad de México, sobrepoblada, con graves carencias y sujeta a intensos flujos migratorios, no existe una política de conservación del patrimonio ya construido.

En suma, los diversos problemas arriba señalados sugieren que es imposible

³ El desplazamiento y el deterioro de la vivienda en el centro de la ciudad de México a lo largo del siglo XX ha sido estudiado con detalle por José Antonio Rojas Loa, dentro de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, y los resultados de su investigación están incluidos en la Tesis para optar el grado de licenciado en Antropología Social, que presentará próximamente en la ENAH.

reconstruir la ciudad de México. No se puede reponer “lo que había”, porque junto con los ladrillos, varillas y adobes que cayeron se transformó también el punto específico en el que estaba establecida la competencia entre las viviendas populares céntricas, más o menos deterioradas, y el empuje de los procesos especulativos encaminados a imponer otros usos del suelo.

La ciudad, los espacios, los barrios y las casas no son meros recipientes o escenarios donde se desarrolla la vida de sus pobladores, sino que la organización del espacio urbano es a la vez condición y resultado de ésta. La destrucción de una parte de las edificaciones céntricas de la ciudad abre, por una parte, nuevas posibilidades para la especulación: porque aparecen áreas “liberadas” de los inmuebles que las ocupaban anteriormente y se plantea entonces la posibilidad de liberarlas también de sus pobladores; además, los esfuerzos que se emprendan por rehabilitarlas —sea que corran a cargo de empresas privadas, organismos estatales o de la acción vecinal— aumentan su valor y su potencial, añadiendo argumentos a la pretensión de utilizarlas de una manera más rentable. Pero, por otra parte, emergieron, después de los sismos, nuevas fuerzas sociales que frenan las posibilidades de dar rienda suelta al reuso especulativo de los terrenos. Si los inquilinos venían resistiendo desde hace tanto tiempo de manera cotidiana y más bien dispersa, ahora se trata de la acción concentrada en el tiempo de medio millón de damnificados en defensa de la vivienda popular, que cuentan con un consenso social significativo en apoyo de sus demandas y, una parte de ellos al menos, con organizaciones beligerantes e imaginativas.

Si bien los especuladores y las organizaciones vecinales marcan una dinámica, no son las únicas fuerzas actuantes en la redefinición de la ciudad de México después de los sismos. Porque el proceso tiene también una “estática”, a la que contribuyen los programas estatales de austeridad, los escasos recursos económicos y las dificultades para constituirse en un contingente actuante de algunos de los grupos de damnificados, y el carácter selectivo y gradual con que operan los cambios en los usos del suelo, precedidos por las expectativas de especulación y la actividad de las empresas constructoras, incapaces de sumergir a toda la ciudad de México bajo una misma oleada. Dicho en otros términos: la “estática” del proceso significa que en zonas enteras de la ciudad dañadas por los sismos no habrá rehabilitación más allá de reparaciones minúsculas; que los inquilinos que vivían en vecindades ruinosas van a seguir viviendo en vecindades más ruinosas, y los que ocupaban edificios de departamentos deteriorados y sin mantenimiento seguirán en el mismo sitio, más riesgoso ahora.

La ciudad de México no va a quedar tal como estaba antes de los temblores. Tampoco está a la vista el triunfo completo de alguna de las tres opciones en torno a las cuales se está redefiniendo el uso de los espacios urbanos: la consolidación de la vivienda popular en las zonas céntricas, la expansión de usos del suelo más rentables o la profundización del deterioro de los barrios ya degradados. La correlación específica de fuerzas y su despliegue en el tiempo decidirán el destino de cada zona. Lo que aquí interesa resaltar es que la combinación específica que existía antes del 19 de septiembre está alterada y aún no llega a un nuevo punto de equilibrio; y que el problema involucra no sólo a los damnificados.

La disputa por la redefinición del espacio urbano ha sido especialmente aguda y explícita en los casos de la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco y de las vecindades. Aunque éstas no son las únicas formas de vivienda popular que existen en el centro de la ciudad, en ellas, a diferencia de los edificios de departamentos privados, también dañados por los sismos, se ha llegado a configurar una problemática precisa y reconocida públicamente y, lo que es más importante, un fuerte movimiento vecinal. Por eso las siguientes páginas están dedicadas a un breve recuento de los antecedentes y

la evolución de ambos conflictos, para llegar, en la última parte de este trabajo, a una evaluación de las perspectivas del movimiento de los damnificados y de los programas oficiales de reconstrucción.

NO SE VENDE: *Tlatelolco*

Cuando se empezó a construir la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco, en pleno auge desarrollista y financiada (como tantos otros milagros mexicanos) por el Banco Interamericano de Desarrollo, se decía que se estaban dando pasos en firme para terminar con las ciudades perdidas, las viviendas deterioradas y las vecindades. Por lo pronto, con las precarias habitaciones que ocupaban numerosas familias instaladas en carros de ferrocarril abandonados en los terrenos donde se levantaría la nueva unidad. Estas familias de escasos recursos fueron desalojadas “provisionalmente”, en espera de que se les entregara uno de los departamentos que se estaban construyendo. Tlatelolco habría de albergar también, se decía, a los moradores de las vecindades de la colonia Guerrero. Algunos años antes, la prolongación de Reforma hacia el norte apuntaba ya en la misma dirección: abrir el paso a una ciudad moderna haciendo de lado a las vecindades. Efectivamente, gran cantidad de viviendas precarias fueron demolidas; pero no fue cierto que sus ocupantes encontraran alojamiento en Tlatelolco. Durante los años sesenta, la remodelación urbana trajo un aumento de inmuebles vacíos y terrenos baldíos, junto con un mayor hacinamiento, que pasó de 4.5 a 5.4 personas por vivienda.⁴

La nueva unidad habitacional se fue llenando, entonces, con gente de mayores recursos que los que tenían quienes habían sido sus destinatarios iniciales. Pero también las promesas que se hicieron a este otro grupo, de empleados, profesionistas, pequeños comerciantes, se fueron desvaneciendo. Se hacía propaganda para la compra de condominios, pero lo que se entregaba eran “certificados de participación inmobiliaria”. Se ofrecía un desarrollo urbanístico en el que estarían integrados todos los servicios: escuelas, áreas verdes, centros deportivos y sociales; en cambio, la mayor parte de los espacios proyectados como comunes acabaron en concesión particular o albergando oficinas públicas. Se dijo que se trataba de viviendas de interés social, pero cuando a sus residentes les tocó pagar los impuestos prediales se les cobró más que lo que pagaban los capitalinos más ricos en las zonas residenciales de la ciudad. Se mostraba un departamento piloto, pero se entregaba uno distinto. Se habían ofrecido nuevas posibilidades de convivencia vecinal, pero, sobre todo después de la introducción del metro, a finales de los años sesenta, lo que campeaba era el deterioro de la zona: ruido, basura, congestionamiento del tráfico peatonal e inseguridad.⁵

Como el deterioro de la unidad habitacional iba creciendo con el paso de los años, los residentes iniciaron, en 1974, una lucha por mejorar sustancialmente la calidad de los servicios y por que las cuotas de mantenimiento y administración que pagaban correspondieran realmente a los servicios proporcionados. El movimiento de autoadministración surgió en los edificios Arteaga y Lerdo, cuyos habitantes se negaron a pagar el aumento de un 20% de las cuotas de mantenimiento y convocaron a una huelga de pagos a la que se sumaron los residentes de 70 edificios, exigiendo también la auditoría de la Asociación Inmobiliaria (AISA) encargada de gestionar la unidad. El Consejo de Edificios en Autoadministración mantuvo la vigilancia sobre los problemas

4 José Antonio rojas Loa, “La transformación de la zona central: ciudad de México, 1930–1970”, en Alejandra Moreno Toscano (coordinadora), Ciudad de México. *Ensayo de construcción de una historia*, Colección Científica del INAH, n. 61, México, 1978.

5 “Autoadministración en Tlatelolco”, *Punto Crítico*, n.72, marzo de 1977.

de conservación de la zona habitacional. Éstos eran cada vez más graves: no se trataba solamente de las cuestiones de limpieza y atención de los jardines, sino de mantenimiento de los propios edificios, que la Inmobiliaria se negaba a proporcionar. A partir de 1982, FONHAPO asumió la atención de la unidad habitacional y, debido a la insistencia del Consejo, se logró que se emprendieran los trabajos de recimentación y nivelación de los edificios Tamaulipas y Juárez. En el Nuevo León, estos trabajos primero se hicieron mal y después se dejaron a medias.

El 19 de septiembre de 1985 se derrumbó el edificio Nuevo León, sepultando a sus residentes y a la manta que colgaba desde hacía mucho tiempo de su fachada, donde se exigía públicamente a FONHAPO que cumpliera con la recimentación urgente. El 20 de septiembre, los sobrevivientes del Nuevo León tomaron las oficinas de FONHAPO, obligando a su director a firmar un acta en la que se comprometía a restituir las viviendas y, mientras tanto, a entregar cuatro mil pesos diarios a los damnificados de cada departamento, como ayuda para alojamiento y alimentación. El problema fundamental —y no sólo para el Nuevo León, sino para todo Tlatelolco— se empezó a perfilar entonces: era la negativa gubernamental, de más alto nivel, a reponer las viviendas. Primero las desplomadas del Nuevo León, después las que estaban dañadas en los edificios evacuados. La primera medida encaminada en esta dirección fue el desconocimiento del acta pactada entre los sobrevivientes del Nuevo León y FONHAPO, la renuncia del director de este organismo, que la había firmado, y la disposición presidencial de que fuera la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) la única instancia facultada para el tratamiento de los problemas de Tlatelolco.⁶

A principios del mes de octubre, la presión de los sobrevivientes del Nuevo León iba en aumento y ellos encabezaron las movilizaciones de los damnificados de toda la ciudad. El 12 de octubre realizaron la primera marcha conjunta con el resto de los tlatelolcas y los inquilinos de las vecindades de diversos barrios. En la entrevista que les concedió el presidente De la Madrid, éste se comprometió a que las viviendas fueran restituidas y los culpables del derrumbe castigados. Pero mientras el presidente prometía cualquier cosa, sin estar dispuesto a cumplirla, SEDUE instrumentaba las verdaderas decisiones gubernamentales. Diez días más tarde el secretario Guillermo Carrillo Arena amenazaba: si las propuestas del gobierno no se aceptaban, el siguiente paso sería la intervención de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Gobernación. Además, estaba en sus manos alargar el tratamiento del conflicto mediante diversos trámites legales y así lo hizo saber.

Lo único que el gobierno no iba a hacer era reponer las viviendas. Entonces toda la negociación se centró en el monto de los seguros e indemnizaciones que habrían de pagarse por cada departamento, por cada muerto; y en la forma y magnitud que tendrían los créditos blandos que se otorgarían a cada ex-residente para que se fueran a comprar casa en otro lado. El convenio se firmó el primero de noviembre, el día de los muertos chiquitos.

Dicen que en las altas esferas gubernamentales se dio una prioridad “triple A” a la solución del conflicto del edificio Nuevo León. Pero en Tlatelolco hay 103 edificios y 31 de ellos fueron evacuados. Tal vez aquí faltaron algunas “A”, o sobraron intereses especulativos y resistencia vecinal, y por eso pasan tantos meses sin que los problemas ocasionados por los sismos en Tlatelolco se resuelvan globalmente. La firma del convenio del Nuevo León abrió un compás de espera, que fue ampliamente

6 La información sobre Tlatelolco está recogida, fundamentalmente, del Taller de Testimonios organizado por el Centro de Información y Análisis sobre los Efectos de los Sismos (CIASES), que se reunió semanalmente durante octubre y noviembre de 1985, bajo la dirección de Manuel Molina.

aprovechado para difundir la campaña gubernamental, publicitada por todos los medios masivos de comunicación, de nuevos convenios pactados con las asociaciones de residentes de cada edificio o bien cada residente en lo individual. Había regateos, claro está, por el monto de los seguros que se pagaron y que fluctuaron entre uno y medio y casi cinco millones de pesos sin que los beneficiarios sepan muy bien el porqué de estas diferencias, que han llevado a muchos a suponer que es cierto aquel proverbio popular que dice que “del tamaño del sapo es la pedrada”. En todo caso, si con más o menos regateos y de residente en residente se iban pactando los convenios, sería cuestión de tiempo que todos acabaran por firmar.⁷

Pero a finales de enero había solamente cuatro edificios desocupados por completo: el Nuevo León, el Oaxaca, el Querétaro y el Guanajuato. En cambio los residentes de otros, como el Molino del Rey y el Miguel Hidalgo, informaron orgullosos que “ninguno de los vecinos había aceptado firmar ningún convenio”. El resto de los edificios de la unidad habitacional están en una situación intermedia: mientras que unos ya firmaron, otros se regresaron a ocupar sus viviendas. Por todo Tlatelolco se ven letreros en las fachadas y en las ventanas de los departamentos: “No se vende”.

Porque en los certificados de participación inmobiliaria que entregó BANOBRAS a cada residente desde que adquirió y empezó a pagar su departamento, hay una cláusula (la octava o la treceava, según el caso) que establece que “...son obligaciones del banco mantener en vigor un seguro suficiente contra incendios, rayo, temblor y explosión sobre el inmueble materia de esta emisión y los bienes destructibles del mismo, mientras el inmueble permanezca afecto al fideicomiso o resuelva lo contrario la asamblea de tenedores. El fiduciario deberá comprobar que ha cumplido con esta obligación cuando así lo solicite el representante común y, en caso de ocurrir el siniestro, estará obligado a invertir la indemnización precisamente en la reparación o reconstrucción del edificio dañado o destruido, así como de sus elementos, objetos, instalaciones y demás bienes perjudicados por el siniestro, en la forma que en su caso determine la asamblea”.

El problema de Tlatelolco no se resuelve porque SEDUE, la supersecretaría encargada de atenderlo por encima de cualquier otra instancia, niega el cumplimiento de lo estipulado en los certificados de participación inmobiliaria, mientras que los residentes insisten en hacerlo cumplir. No se trata nada más de quién establece el principio de legalidad o de autoridad, sino que está en juego el destino de la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco; lo que está pendiente no es ni siquiera si se tiran o se conservan los edificios, sino si se destinan o no a una función habitacional.⁸

Siendo éste el punto central de definición, aún los actos irracionales promovidos por SEDUE cobran coherencia: por ejemplo las presiones que se han ejercido, también sobre los habitantes de los edificios que no resultaron dañados por los sismos, para que acepten venderlos y contratar un crédito para la compra de una vivienda en la periferia de la ciudad; o la recomendación de la Secretaría a los firmantes de los convenios de que se lleven todos los pedazos de sus departamentos que puedan ser trasladados: las puertas, los pisos, los muebles del baño y los lavaderos, las ventanas y todo aquello que normalmente hace habitable una casa. También explica que cuando se den a conocer los peritajes realizados por la Secretaría para evaluar el estado de los inmuebles, los funcionarios entreguen sólo un listado que dice si el edificio es habitable o no, y si tiene daños mayores o menores, pero que nieguen a los residentes los informes detallados

7 “Cronología de acontecimientos y declaraciones en torno al sismo ocurrido en México el 19 de septiembre de 1985, aparecidos en los principales diarios”, anexos especiales a los números 15, 16, 17 y 18 de las *Cronologías e indicadores internacionales y nacionales* editadas por SIPRO (Servicios Informativos Procesados, A. C.), de septiembre a diciembre de 1985.

8 Entrevistas directas realizadas con los residentes de Tlatelolco, integrantes de la Coordinadora Única de Damnificados.

sobre el tipo de daños que se encontraron, bajo el argumento de que tales informaciones podrían prestarse a “interpretaciones subjetivas”. Más grave todavía, pero igualmente explicable, es la forma en que los funcionarios de SEDUE entienden el convenio pactado con los residentes que aceptaron dejar sus departamentos: en él se estipulaba que quienes aceptaran una suma determinada por concepto de pago del seguro o de la venta de su vivienda tenían, en caso de que el edificio resultara habitable o reparable, la posibilidad de volver a ocuparlo si devolvían el dinero que habían recibido. Algunos ex-residentes ya intentaron que se cumpla este punto del pacto y la respuesta es que, efectivamente, cuentan con prioridad en la opción de compra, pero que los departamentos se les van a entregar a finales de 1986 y con un costo de dos a tres veces mayor de lo que les pagaron a ellos a finales de 1985.

Que el gobierno no trata de resolver los problemas de los damnificados, sino de dejar que otros —los especuladores y constructores privados, por ejemplo— hagan negocio a costa de ellos y que el pago de la reposición de las viviendas recaiga sobre la propia población afectada, lo muestra también el tratamiento que se dio a los damnificados de los cuartos de azoteas de Tlatelolco. Es en este sector donde sí se encuentran personas con el nivel de ingresos y de empleo equivalentes al de aquellos pobladores de las vecindades y de los carros de ferrocarril a quienes supuestamente estaba destinada la unidad Nonoalco-Tlatelolco. O sea que si vivían en los cuartos de azotea era porque no se podían comprar una casa en otro lado, y porque dependían del mismo Tlatelolco y de las áreas vecinas para encontrar algún trabajo. Haciendo abstracción de todo esto, la SEDUE les propuso conseguirles un crédito blando para la adquisición de un pie de casa en el fraccionamiento Alborada Aragón. Siempre y cuando demuestren ingresos mensuales de, por lo menos, 82 mil pesos, y estén en condiciones de pagar 17,500 cada mes de 1985, que en 1986 se convirtieron en 24,000 y que cada año irán subiendo hasta que se complete el equivalente al precio siempre en ascenso de la casa, lo que no podría suceder antes de quince o veinte años.⁹

Que no es el gobierno solo quien decide la suerte de los damnificados, lo muestra también el movimiento de los inquilinos de los cuartos de azotea. Después de tantas marchas, tantas entrevistas con los funcionarios y tantos meses de vivir en tiendas de campaña, ganaron su inclusión en el programa de Renovación Habitacional Popular y su reacomodo en unos terrenos expropiados y que se localizan a pocas cuadras de distancia de Tlatelolco. Ganaron también el acuerdo de que se iniciaría ahí la construcción de viviendas definitivas, que implicarían pagos mensuales equivalentes al 20% del salario mínimo. A principios de febrero se trasladaron de su campamento al albergue provisional. Van todos juntos y van vigilantes; a construir una sección más de Tlatelolco.

Pero la cuestión central sigue estando en todo lo que queda debajo de las azoteas. A principios de enero de 1986 SEDUE informó que, según los peritajes efectuados, muchos de los edificios habían resultado inhabitables, y que las autoridades estaban estudiando la posibilidad de destinarlos a otros fines. ¿Por qué? ¿Quiere esto decir que para las autoridades es inadmisibile que los residentes ocupen viviendas peligrosas, pero que pueden aceptar que las oficinas se desplomen sobre los empleados? ¿O se trata más bien de destinar la zona, de gran potencial por su ubicación céntrica, a usos más rentables? Circulaba un proyecto para construir en Tlatelolco un centro de convenciones, con estadios deportivos y hoteles, y hubo también los partidarios de una “reconstrucción” fulminante de la ciudad, que acariciaban la idea de que el complejo

9 Ponencia presentada por la Coordinadora de Cuartos de Azotea en el foro sobre los Efectos Sociales de los Sismos, realizado por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Programa Universitario “Justo Sierra” de la UNAM, los días 6, 7 y 8 de noviembre de 1985.

turístico estuviera terminado antes del Mundial de Fútbol. Serían habladurías, o los promotores de este proyecto perdieron el partido. El subgerente de Planeación Técnica de BANOBRAS —tal vez miembro de otro equipo— declaró al diario *El Universal*, el 24 de enero de 1985, que la unidad Nonoalco- Tlatelolco “será sometida a un programa que modificará su diseño para reincorporarla a la traza urbana, cambiará el uso del suelo en que está sentada y dará cabida a oficinas gubernamentales, así como a más servicios comunitarios”.

Los residentes fueron informados por SEDUE, a principios de febrero, de algunas de las modificaciones que se planea introducir: mientras algunas áreas serán bardeadas otras se abrirán al tráfico de automóviles.¹⁰ Con esta propuesta se pretende cerrar todo el círculo en el que está atrapado el urbanismo oficial, incapaz no sólo de promover, sino de tolerar la vida vecinal. Primero se planeó Tlatelolco como una unidad, en la que estaban previstos los espacios para la convivencia social; en ese entonces, la comunicación entre los residentes quedó bloqueada por la densificación, el incremento de la población flotante, el uso de los espacios colectivos para fines ajenos a los que se habían ofrecido y por el ritmo individualista y acelerado de la vida metropolitana. Con los sismos, con una tragedia y una lucha vividas en común, comenzó un renacimiento de la vida vecinal. La gente se conoció en las labores del rescate, en los campamentos, en las asambleas, en las manifestaciones y en las entrevistas con los funcionarios. Hubo verbenas populares cuando volvieron a ocuparse algunos de los edificios que habían sido evacuados y los tlatelolcas empezaron a reconocer que vivían en un sitio que era más grande y más habitable que el espacio delimitado desde la puerta hacia el interior de sus departamentos. Al unirse se hicieron fuertes y hablaron de sus derechos en voz alta y frente a los funcionarios; una vez, también delante del presidente. Entonces a los funcionarios les dio miedo y decidieron compartimentar la unidad con bardas y calles.

NO NOS MOVEREMOS DE AQUÍ: *Las vecindades*

Varios años antes de los sismos —en 1981— la dirección general de Prevención y Atención de Emergencias Urbanas de la SAHOP elaboró un detallado estudio sobre el riesgo sísmico en el Valle de México. En las zonas céntricas de la ciudad, de suelo blando, los autores de dicho estudio detectaron 120 mil viviendas construidas con materiales de alta vulnerabilidad, como el adobe y el bajareque, y que por su nivel de deterioro eran peligrosas ante un sismo fuerte. Se concluía que era necesario renovar urgentemente estas viviendas. En vez de eso, se enterró el documento que advertía sobre el peligro, se desapareció la dirección general que lo había elaborado y las vecindades se cayeron con los temblores de septiembre de 1985.¹¹

El descuido, que a veces duraba un siglo, dio sus frutos. La falta de mantenimiento y de las reparaciones más elementales provocaban desplomes en las vecindades durante cada temporada de lluvias. Hacía muchos años que rentar viviendas a los inquilinos pobres ya no era negocio. Los caseros, para deshacerse de sus arrendatarios, recurrieron a los lanzamientos, a las demoliciones y a la simple acción de la “piqueta natural”: el tiempo que iba dañando los inmuebles hasta volverlos inhabitables. Parecía que los sismos sólo habrían de acelerar el consabido proceso de derrumbe de las habitaciones deterioradas y de expulsión de las zonas céntricas de las familias de más bajos recursos. Y ésta hubiera sido la tendencia fundamental si no estuviera de por medio la resistencia

10 Véase *La Antena*, semanario publicado por los residentes de Tlatelolco, octubre-noviembre de 1985.

11 Véase el artículo “Sigue siendo alto el riesgo de terremotos en el Valle”, por José Barberán, publicado en *Excélsior*, el 13 de octubre de 1985.

de los vecinos.

Desde el 19 de septiembre, los habitantes de las vecindades dañadas se plantaron en las calles, enfrente de los predios donde vivían, y se pusieron a cuidar lo que había quedado de sus cosas y sus casas. Al principio no se podía encender el gas, no había agua ni electricidad, y había incertidumbre y un miedo que creció con el segundo temblor del 20 de septiembre. La ayuda oficial no llegaba a los barrios populares, pero empezaron a llegar los brigadistas, transportando agua y alimentos. Fueron sobre todo los mismos vecinos de la zona los que más ayudaron a los que se encontraban en una situación crítica. A una semana de los sismos se realizó la primera marcha de los damnificados de las colonias Morelos, Guerrero, Centro, Santa María y Tepito; circularon los primeros boletines de prensa donde se exigía la distribución directa de la ayuda recabada nacional e internacionalmente entre los habitantes de las colonias populares; y se hizo pública la demanda central y común a todos los moradores de las vecindades: la reparación de sus viviendas y la permanencia en los mismos terrenos que venían ocupando.¹²

Durante las semanas siguientes, la ofensiva de los caseros se recrudeció: declararon terminados los contratos de arrendamiento y exigían el desalojo de los inquilinos. Entre el 23 de septiembre y el 10 de octubre se estableció una verdadera “guerra de peritajes”¹³ Los dueños de los inmuebles, por cuenta propia o apoyados por las delegaciones, particularmente en la Cuauhtémoc, levantaban actas en las que se decía que la vecindad era inhabitable y que debía ser demolida; los inquilinos, apoyados por brigadistas de la UNAM, la UAM y el Politécnico, también elaboraron dictámenes en los que se establecía la peligrosidad de los inmuebles y las formas de emprender las reparaciones más urgentes, que permitieran a sus moradores volver a ocuparlos en los casos en que los daños no eran irreparables. En la colonia Guerrero, algunos propietarios llegaron con cuadrillas de albañiles para derribar lo que había quedado en pie de las vecindades. En la colonia Tránsito, cortaron el servicio de luz y agua potable, para obligar a los inquilinos que acampaban frente a terrenos a retirarse del sitio. Las autoridades declararon que no aportarían ninguna ayuda a los damnificados que no se concentraran en los albergues oficiales y, en el Centro, llegaron los soldados a amenazar a los vecinos que acampaban en las calles y plazas, advirtiendo que la decisión gubernamental era impedir que la gente permaneciera en la vía pública.

Sólo que la magnitud del problema rebasaba con mucho la capacidad de acción de los caseros, los funcionarios y los soldados. En cada calle de las zonas devastadas había campamentos: la inmensa mayoría de los damnificados no acudieron a los albergues. Más allá de los malos tratos y del control burocrático que prevalecía en estos últimos, el problema de fondo es que resultaron inadecuados para atender la compleja situación de los inquilinos: que no podían conformarse con un refugio para unas cuantas noches, si después de ellas llegaría la incertidumbre de no tener donde vivir.

Durante las primeras semanas que siguieron a los sismos, mientras diversos funcionarios hablaron de la disponibilidad de unas 11 mil viviendas en varias zonas del estado de México, que podían ser ofrecidas en venta a los damnificados a través del otorgamiento de créditos blandos, los inquilinos de las vecindades insistieron en su propia idea de la reconstrucción: ésta debía hacerse en los mismos terrenos que

12 La información sobre los efectos de los sismos en las vecindades y sobre los procesos de organización vecinal está tomada, básicamente, de las ponencias presentadas por 19 agrupamientos, participantes en el Foro sobre los Efectos Sociales de los Sismos (cit. ant.). Las relatorias y conclusiones generales de dicho Foro, fueron publicadas por la Dirección de Estudios Históricos del INAH, en enero de 1986.

13 Información recogida por las Brigadas Interdisciplinarias del INAH, en el trabajo de campo que realizaron en el Centro Histórico de la ciudad de México durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1985, con el objeto de analizar los efectos de los sismos en esta área de la ciudad.

ocupaban antes de los sismos y debía tener por objeto reedificar las vecindades, y no construir “palomares”. La amplia defensa de las vecindades y de la vida en los barrios enfatizaba el propósito de conservar un tipo de vivienda que los damnificados ya tenían y que pueden pagar. Pero más allá de una cuestión estrictamente económica, está la defensa de una forma habitacional distinta.¹⁴

No habría que entender a las vecindades como sinónimo de habitación tugurizada. Se trata de una alternativa de vivienda popular surgida desde el siglo XVIII, donde el espacio se organiza dentro de una unidad cerrada y las habitaciones familiares rodean un patio común que alberga los servicios colectivos. Las vecindades, por su carácter multifamiliar, han mostrado una gran resistencia ante los procesos especulativos y de cambio en los usos del suelo; también han mantenido la flexibilidad suficiente para adaptarse a las peculiares necesidades de sus ocupantes. Entre ellos, la ausencia de un empleo estable y de ingresos suficientes ha reforzado a las familias —más o menos extensas— como organizadoras de las estrategias de sobrevivencia, y sólo la suma de las percepciones de sus integrantes, dedicados a diferentes actividades, permite al conjunto salir adelante. La combinación de ocupaciones imprime su sello al espacio urbano, donde el lugar de vivienda es inseparable del entorno en que se desarrolla la producción artesanal, el pequeño comercio —ambulante o estable— y la prestación de servicios.

Amplios grupos populares se encuentran firmemente anclados en las zonas céntricas de la ciudad: por tradición y arraigo, y también porque su intenso tráfico y su potencial económico, así como la posibilidad de pagar rentas bajas, sostienen el frágil equilibrio de la subsistencia. Contra las vecindades se alega el hacinamiento, y es cierto que la falta de espacio es un problema grave. Pero también es cierto que este problema no se resuelve metiendo un par de tabiques que atraviesan los 30 metros cuadrados de los “pies de casa” o de los minúsculos departamentos de interés social que ofrecen tanto las instituciones oficiales como las constructoras privadas. En todo caso, el problema del espacio en las vecindades no depende únicamente de la vivienda familiar, sino que se cuenta con el patio como un espacio de transición entre las áreas públicas y las privadas, y que llega a albergar desde los talleres artesanales hasta los juegos infantiles, desde las fiestas hasta el intercambio cotidiano entre los vecinos.

En el otro extremo, tampoco habría que idealizar las vecindades. Por una parte porque la falta de mantenimiento es lo que, efectivamente, las puede aproximar al tugurio; y por otra porque el término vecindad, que históricamente había designado un modelo de habitación popular capaz de cumplir con su cometido, se ha llegado a aplicar indiscriminadamente a cualquier agrupamiento de cuartos redondos que dan a un pasillo, dejando de lado la existencia de un patio, de servicios y de las condiciones que hagan habitable el área unifamiliar. Lo que sucede es que históricamente se ha degradado la habitación popular y con ella el concepto mismo de vecindad, que sugiere no el deterioro, sino la posibilidad de combinar los usos colectivos y privados de los espacios, extendiendo el concepto de vivienda más allá del área que ocupa cada familia, y no circunscribiéndolo a un puro amontonamiento de cuartos redondos. El deterioro de las vecindades construidas originalmente como tales y el surgimiento de otras nuevas, que aparecieron ya como viviendas degradadas, está ligado a dos procesos que rigen el desarrollo del centro: la especulación, que avanza predio por predio desalojando a los inquilinos e introduciendo cambios en los usos del suelo; y la acción de los fabricantes y comerciantes que fundan parte de sus ganancias en la propia tugurización,

14 “Informe sobre la situación socioeconómica de la Colonia Morelos después del sismo del 19 de septiembre”. Colectivo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, dirigido por el doctor Eckart Boege, México, 20 de noviembre de 1985 (mecanoescrito).

aprovechando los bajos precios que pagan por los talleres y bodegas y la abundancia y el reducido costo de la mano de obra.¹⁵

Los sismos de septiembre pusieron en peligro este complejo mundo de las vecindades. No sólo por los daños inmediatos que provocaron en ellas, sino por los procesos que podrían desatarse en toda la zona una vez que su frágil equilibrio se había alterado. Estaban en juego un inmenso problema habitacional y ocupacional y la red de historias y relaciones sociales que permiten la sobrevivencia de grandes masas capitalinas. No sólo: estaba en juego un poderoso y creciente movimiento vecinal, que empezó a expresarse de inmediato, que ya había puesto en evidencia la incapacidad del régimen para hacer frente a una situación de emergencia y que desafiaba, con propuestas y demandas propias, los intereses encaminados a aprovechar la destrucción de viviendas para acelerar el proceso de expulsión del centro de los inquilinos de escasos recursos. Esta situación explica la decisión gubernamental de expedir un decreto expropiatorio sobre una gran cantidad de los predios donde había vecindades dañadas.

Este decreto tuvo un claro sentido político, que prevaleció por encima de su posible eficacia para hacer frente a los problemas de la ciudad. Su primera versión fue emitida el 11 de octubre, cuando el miedo y el desconcierto que provocaron los sismos ya había dado paso a una presión popular en aumento y a una impugnación del régimen cada vez más generalizada. La sorpresiva expropiación pretendía permitir que el gobierno retomara la iniciativa y crear la imagen de que la situación estaba bajo control; cuando todas las instancias gubernamentales habían mostrado su incompetencia para afrontar la catástrofe, el poder se reconcentró en manos del presidente. La decisión respecto a los predios que debían expropiarse se tomó al vapor y se cometieron numerosos errores que cuestionaban la aplicación de los criterios que justificaban el decreto: se expropiaron viviendas unifamiliares habitadas por sus propietarios, vecindades que los inquilinos habían comprado anteriormente y hasta terrenos o construcciones que ya eran propiedad del Departamento del Distrito Federal. Pero las posteriores modificaciones que sufrió el decreto no obedecieron a la reparación de “erratas” o errores, tanto como a negociaciones políticas con los propietarios. Los resultados de las “correcciones” dejan el siguiente saldo: de cerca de 7 mil predios afectados quedan poco más de cuatro mil que, a cuatro meses de que se publicara la primera versión del decreto, todavía siguen sujetos a una posible revocación. Los inquilinos han presentado numerosos casos en los que las vecindades afectadas por los sismos acabaron “desexpropiadas”, y esta situación está generalizada en el caso de los edificios de departamentos, muchos de ellos severamente dañados. De 115 colonias donde había expropiaciones, según el primer decreto, quedaron 85 una vez que éste pasó por sucesivas revisiones.

La selección de los terrenos expropiados se hizo con criterios políticos, que no atendían a la magnitud de los daños que los sismos provocaron en las viviendas. Las expropiaciones se concentraron en aquellas zonas donde las organizaciones vecinales se mostraron más beligerantes, pese a que en otras colonias pudieran encontrarse un número equivalente o hasta superior de habitaciones destruidas. Así, por ejemplo, el 60% de los predios de uso habitacional de Tepito son propiedad del DDF; en la colonia Morelos fueron expropiadas alrededor del 40% de las vecindades, pero se calcula que otro 40%, que también requieren de reparaciones urgentes, fueron dejadas de lado por los decretos; y en la colonia Emilio Carranza, ubicada unas cuantas cuadras más al norte de Tepito, sólo se expropiaron 32 vecindades de las 416 con las que cuenta la colonia, a

15 José Antonio Rojas Loa distingue entre las viviendas construidas expresamente como vecindades (o sea: concebidas como forma de habitación popular) y aquellas que llevan este nombre, pero están ubicadas en las grandes casas coloniales que fueron subdivididas y quedaron sujetas a un prolongado proceso de deterioro desde el siglo XIX.

pesar de que la mitad del total tiene daños severos y de que no existe ninguna razón para pensar que los efectos de los sismos hayan sido más leves de lo que fueron en Tepito, cuando que se trata de una misma área. En otra zona de la ciudad, en la colonia Buenos Aires, que colinda con la avenida Cuauhtémoc, donde los derrumbes fueron particularmente graves, los inquilinos señalaron que el 80% de las vecindades estaban dañadas y que las expropiaciones habían sido insignificantes. A este carácter profundamente selectivo del decreto expropiatorio hay que agregar que resultó insuficiente. Por ejemplo: en la colonia Guerrero el número de predios expropiados resulta comparativamente alto; fueron expropiadas alrededor de 400 vecindades, pero los inquilinos hicieron un listado de otras tantas que se encuentran en la misma situación y que quedaron marginadas. Durante los meses de octubre y noviembre de 1985, los habitantes de más de 25 colonias de diversos puntos de la zona devastada se manifestaron en demanda de la ampliación del decreto expropiatorio.¹⁶

Como complemento del decreto y para emprender la reconstrucción en los predios expropiados, se anunció el programa de Renovación Habitacional Popular. Puede decirse que éste, calculado para atender entre 40 y 45 familias de damnificados, apenas ronda la punta del iceberg de la problemática de las vecindades. Los datos que los propios damnificados aportan sobre la situación de sus viviendas indican que dicho programa no llega a atender siquiera a la mitad de las vecindades dañadas por los sismos. A esto hay que agregar las dificultades que introduce la propia operación del programa. A mediados de octubre, después de que se anunció la expropiación, hubo fiesta en las vecindades y muchos inquilinos fueron a Los Pinos a darle las gracias al presidente. Pero pocos días más tarde las interrogantes eran otras: ¿quién va a reconstruir las viviendas? ¿Cómo se van a financiar las obras? ¿Va a tocar a los inquilinos pagar por los terrenos expropiados? ¿Cuánto va a tener que pagar cada familia por su nueva vivienda y durante cuánto tiempo? ¿Cómo se va a garantizar que los antiguos inquilinos tengan acceso a las viviendas rehabilitadas? A cuatro meses de que se anunció el programa de Renovación, estas preguntas siguen sin respuesta. Lo único que está claro es que los costos de la reconstrucción de las viviendas van a recaer sobre sus destinatarios. Esta sola certidumbre resulta angustiante para muchos de ellos, que no cuentan con ingresos suficientes para pagar más de lo que antes de los sismos desembolsaban por concepto de rentas.

Buscando tranquilizar a los damnificados, la primera acción que se emprendió bajo el programa de Renovación fue la entrega de certificados en los que se reconocen los derechos de los ex-inquilinos. La medida no resulta lo suficientemente tranquilizadora porque persiste el temor de que sea interpretada como un simple derecho de opción de compra, como sucedió bajo el Plan Tepito, cuando se demolieron las vecindades en que habitaban 600 familias y se les ofreció la posibilidad de comprar un departamento que para la tercera parte de los beneficiados por el Plan resultó inaccesible, por lo que acabaron sin vecindad vieja ni departamento nuevo. Y esto en el caso de que efectivamente se rehabiliten las viviendas, porque los certificados de derechos también se han interpretado como “derechos a salvo” sobre las casas que algún día podrían llegar a construirse. Estos temores se fundan en el hecho de que, mientras se insiste públicamente en que la reconstrucción estará terminada a finales de 1986, los recursos financieros con que habrán de realizarse las obras en vez de que aparezcan de manera tangible, se vuelven cada vez más nebulosos. A finales de 1985 se decía que se contaba con 60 o 70 mil millones de pesos destinados al programa de Renovación Habitacional; pero en las partidas de la Secretaría de Programación y Presupuesto para 1986 aparecen 23 mil millones destinados a la reconstrucción, y todavía queda la duda de que los

16 Ponencias presentadas en el Foro sobre los Efectos Sociales de los sismos, cit.

recursos anunciados constituyan la suma de las partidas que corresponden a los diferentes organismos públicos de vivienda (INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO, etcétera), sin que se sepa cómo habrán de reorientarse dentro del programa de Renovación y si esto supone el sacrificio de los beneficiarios habituales de las diversas instituciones involucradas.¹⁷

La polémica pública en torno a la rehabilitación de las vecindades, más que abordar el problema del financiamiento, se ha centrado en definir quiénes serán los agentes de la reconstrucción. Por una parte aparece el rechazo, bastante generalizado entre los damnificados, de que actúen las empresas privadas, porque no tienen ninguna experiencia de trabajo con la comunidad y pueden emprender proyectos que resulten sumamente caros y ajenos a las necesidades de los destinatarios. Por otra parte la autoconstrucción, entendida como un proceso en el que cada familia de damnificados levante su vivienda con sus propias manos, resulta utópica e injusta, ya que difícilmente se puede contar con la disposición de tiempo y con la capacitación técnica que se requieren para mantener el prolongado esfuerzo que exige la construcción.

Las agrupaciones vecinales han avanzado en la definición de propuestas intermedias, como son la integración de brigadas de autoconstrucción que permitan a los desempleados del propio barrio encontrar un trabajo socialmente útil y por el cual se les pague un salario; o bien la operación de empresas privadas bajo la vigilancia de los vecinos, que habrán de definir el tipo de vivienda que quieren y que pueden pagar. En otros casos —en las colonias Doctores, Morelos, Tepito, Guerrero— los damnificados, asesorados por equipos de universitarios, cuentan con proyectos de rehabilitación para algunos centenares de vecindades y se proponen administrar directamente los recursos financieros ofrecidos por el programa de Renovación Habitacional.¹⁸ Si bien los grupos más sólidamente organizados lograron ya realizar los apuntalamientos y reparaciones más urgentes de las vecindades donde habitan, y cuentan con algunos recursos proporcionados por organismos no gubernamentales, no pueden asumir por cuenta propia las tareas de rehabilitación de sus barrios por lo que terminan por quedar también sujetos a la indefinición que impide el otorgamiento de los créditos oficiales. Mientras tanto, los intentos de solucionar burocráticamente el problema siguen empantanados: a principios de febrero, los responsables del programa de Renovación Habitacional convocaron a empresas constructoras privadas para realizar las obras, pero la invitación tuvo una acogida muy fría. Edificar viviendas populares no parece un buen negocio.

Otro de los problemas que aún no está definido y que traba la reconstrucción se refiere a las formas de propiedad que habrán de establecerse sobre las vecindades expropiadas. La polémica en torno a este asunto ha sido intensa y la preocupación de las organizaciones vecinales consiste en que el gran esfuerzo colectivo que supone la rehabilitación de los barrios desate nuevos procesos especulativos, que provoquen, más temprano que tarde, la expulsión de las familias de bajos recursos. A estas alturas, muchos de los ex-inquilinos más pobres —sobre todo los que tenían rentas congeladas o pagaban alquileres muy bajos— ya no están seguros de que la expropiación pueda beneficiarlos, porque temen que el precio de las nuevas viviendas quede fuera de su alcance. Los agrupamientos de damnificados proponen modalidades de tenencia colectiva, que limiten la circulación comercial de las viviendas; desde las esferas gubernamentales se ha sugerido el condominio, pero todavía no se toma una decisión al

17 SIPRO. *Cronologías e indicadores...*, cit.

18 Véase los estudios realizados por el equipo interdisciplinario de la UAM-Azcapotzalco, que inició la elaboración de un proyecto de rehabilitación del barrio de Tepito en coordinación con los vecinos de la zona. Un resumen de esta experiencia, que se remonta a principios de los años ochenta, fue presentada en el Foro sobre Efectos Sociales de los Sismos, cit.

respecto.

El decreto expropiatorio primero y el programa de Renovación Habitacional después generaron grandes expectativas entre los damnificados, pero introdujeron también una gran incertidumbre. Las amplias movilizaciones de octubre y noviembre de 1985 amainaron a finales de año. Los barrios más organizados y beligerantes —Tepito, la Guerrero, la Morelos— resultaron especialmente favorecidos por los proyectos oficiales, y la movilización global de los damnificados experimentó el retraimiento relativo de los que habían sido los contingentes más dinámicos. El tiempo de espera, que dura ya desde noviembre de 1985 hasta febrero de 1986, está sostenido sobre una mezcla contradictoria de confianza y desconfianza. La tregua no puede durar mucho.

ENTRE LA EMERGENCIA Y LO COTIDIANO: *¿el limbo?*

La toma de conciencia sobre los efectos de los sismos de septiembre se ha desarrollado de manera desigual y paulatina entre la población, damnificada o no. Si muy pronto aparecieron claros a los ojos de todo el mundo los daños que habían sufrido la unidad Nonoalco-Tlatelolco, el multifamiliar Juárez y las vecindades de algunas colonias, esto se debió no sólo a que en el primer caso los derrumbes fueron espectaculares y en el segundo generalizados, sino también a que los vecinos se levantaron rápidamente para denunciar a los culpables de una catástrofe de tal magnitud y para exigir la reposición de sus viviendas. Tanto en Tlatelolco como en Tepito y en las colonias Guerrero, Doctores, Morelos, Centro y Santa María había organizaciones que de tiempo atrás venían luchando por la conservación de las viviendas, entendida en el sentido amplio que incluye la posesión y el mantenimiento, así como el desarrollo de los servicios y de los espacios de convivencia comunitaria.

No obstante, este rápido reconocimiento aceptado socialmente quedó muy por detrás de la problemática nueva que introdujeron los sismos: las vecindades derruidas no están solamente en los barrios en lucha, según lo hicieron ver los inquilinos de colonias olvidadas por el programa de Renovación Habitacional, por los brigadistas universitarios y por la Coordinadora Única de Damnificados. Y la firma de convenios por parte de los residentes del Nuevo León y de algunos de los habitantes de otros edificios está muy lejos de constituir una solución para el conjunto de los tlatelolcas. Además, los inquilinos de los edificios de departamentos severamente afectados por los temblores no han sido atendidos por ningún programa de reconstrucción y apenas empiezan a plantear de manera pública y colectiva las dificultades por las que atraviesan.

Con el paso del tiempo, los problemas de los damnificados parecieran empezar a convertirse en uno más de los problemas que agobian a la ciudad de México: ahora ya no se trata de pelear contra los escombros (por más que éstos todavía no hayan sido removidos), sino de combatir la especulación, la austeridad y un gobierno burocrático y autoritario; que son los mismos enemigos que enfrentan las masas capitalinas. El gobierno dictó, desde diciembre, la vuelta a la normalidad, y la normalidad en la que viven la mayor parte de los habitantes de la ciudad de México no supone el acceso a una vivienda adecuada. ¿Qué tan “normal” será en el futuro próximo vivir en tiendas de campaña, entre plásticos y ruinas o en edificios que presentan un alto riesgo en tanto no hayan sido reparados? La respuesta depende, fundamentalmente, de las movilizaciones populares.

En una primera etapa, el movimiento arrancó de los propios sismos, dando lugar a la formación de la Coordinadora Única de Damnificados, que logró agrupar a contingentes

sociales muy heterogéneos y con condiciones habitacionales también diversas. Lo que hubo en común no era simplemente la condición de damnificados de los integrantes de la Coordinadora, sino un propósito colectivo: la reposición de las viviendas en el mismo sitio donde se encontraban. O tal vez, dicho de otra manera, la defensa de la vivienda popular en el centro de la ciudad. Que ésta se encontraba en peligro, lo mostraron la ofensiva de los caseros en los barrios populares; la pretensión gubernamental de levantar y dispersar los campamentos, que representaban la fuerza principal que tenían los inquilinos para defender los terrenos donde vivían; y los esfuerzos de SEDUE por dismantelar la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco. Los resultados de esta confrontación inicial resultan favorables para los damnificados. Esto no quiere decir que el triunfo sea completo ni mucho menos irreversible, que se hayan conjurado los lanzamientos de los inquilinos de las vecindades o edificios no expropiados, que se haya garantizado la permanencia en las viviendas eventualmente renovadas de los pobladores de más bajos recursos, o que los tlatelolcas que retomaron sus departamentos logren que se realicen en ellos las reparaciones necesarias para volverlos seguros. Pero este primer triunfo tiene un sentido social de gran valor: los damnificados lograron consolidar la presencia de la vivienda popular en el centro, en condiciones de emergencia en las que los proyectos especulativos repuntaron con fuerza.

Sin que esta primera disputa desaparezca del panorama, la cuestión que ha pasado ya a primer plano es el tipo de vivienda popular que va a permanecer en el centro: ¿renovada o degradada? A casi la mitad de los damnificados, que ocupan los predios expropiados, se les prometió la primera opción; todavía la están esperando. Y en cierto modo también los moradores de las vecindades no expropiadas están esperando, alguien les dijo que su caso se estaba estudiando y que se les iba a tomar en cuenta. Las promesas contienen las movilizaciones, pero llevan dentro la semilla de la subversión. El desencanto puede tardar, pero llega acompañado por la rabia ante la burla y la injusticia que pesa sobre los que esperaron. Durante los días que siguieron a los sismos, los damnificados aprendieron a brincarse las trancas: muchos encontraron que tenían derecho a desobedecer a los caseros, a los soldados y a los funcionarios, y se convencieron de que el gobierno está obligado —y comprometido— a reponer las viviendas. Es cierto que, cinco meses después de los sismos, las condiciones ya no son las mismas, pero también es cierto que lo que bien se aprende jamás se olvida.

Por ahora es difícil prever un estallido simultáneo de todos los grupos de damnificados, pero en cambio resulta lógico esperar un repunte de las movilizaciones, que muy probablemente tenderán a confluir con las luchas de otros sectores urbanos, que no arrancan de los sismos sino de la crisis general de la ciudad de México. En febrero no hay (como había en noviembre) manifestaciones multitudinarias, pero los problemas habitacionales ocasionados por los sismos no han sido resueltos y los damnificados no están conformes.